

# Cómo deben actuar los empresarios ante un gobierno hostil

LA AGUJA DE MAREAR

Javier Ayuso

Nunca en democracia España había tenido un gobierno tan intervencionista y hostil contra la empresa privada. La coalición entre el PSOE y Podemos, asociados con los independentistas, lleva siete años agrediendo, de palabra y obra, a los empresarios, a los que culpa de todos los males del país. La deriva conduce hacia un Estado excesivamente regulado en el que se coloniza la actividad privada, mientras el sector público hace y deshace a su antojo y la seguridad jurídica se ha convertido en un dolor de cabeza para los inversores. Pero lo peor es que los empresarios y quienes lo representan no saben cómo responder a esta actitud. Con algunas excepciones, su actitud ha sido la de ceder “para evitar daños mayores”.

Un simple vistazo a la hemeroteca nos recuerda la ofensiva del Ejecutivo contra la decisión de Ferrovial de mover su sede social fuera de España, la colonización de Telefónica con cambio incluido de presidente, los continuos ataques contra las empresas energéticas (los “ricachones” en palabras de Pedro Sánchez) a las que se les ha llegado a culpar del apagón, los impuestos extraordinarios a la banca y las eléctricas, los ataques sistemáticos de los socios de izquierdas a los beneficios empresariales y la consulta popular en busca de pretextos para impedir la fusión de BBVA y el Banco de Sabadell. Cada vez que surge un problema se buscan culpables en el sector privado y, lo que es peor, surgen las peticiones de nacionalizar determinados sectores económicos.

La Constitución de 1978 establece que España es una “economía social de mercado”, pero los socialistas de hoy se están dejando llevar por sus socios comunistas y los independentistas de izquierdas hacia un intervencionismo sin límites. Todos nos deberíamos alegrar de que España mantenga un crecimiento económico envidiable, que se creen empleos y que la bolsa esté en un momento boyante. Pero es una falacia atribuir esos logros en exclusiva a la acción del Gobierno. Son las empresas las que hacen crecer la economía, generan puestos de trabajo y hacen que los inversores compren sus acciones.

Muchas veces, luchando contra las decisiones oficiales y soportando los insultos de la izquierda política y los propios sindicatos.

Ante este ambiente hostil, los empresarios y sus representantes llevan años agachando la cabeza, mostrando miedo ante el Boletín Oficial del Estado. Y lo que viene sucediendo es que ese silencio para reducir el daño y prevenir nuevas intervenciones lo único que hace es dar rienda suelta a esta doctrina intervencionista, que va a más. Sánchez es un experto en dividir a sus contendientes y lo está haciendo también en el sector empresarial.

El próximo martes 20 de mayo, se celebran las elecciones para elegir al presidente de la patronal de la pequeña y mediana empresa, Cepyme. Compiten el actual presidente, el empresario de tres generaciones Gerardo Cuerva, y una candidata de Valladolid, la abogada Ángela de Miguel. Esta última impulsada por el presidente de CEOE, Antonio Garamendi, que ha declarado la guerra al que también es vicepresidente de la gran patronal.

Sin entrar en la dura campaña electoral que se está planteando, en los méritos de uno y otra, y en los apoyos políticos que están cosechando los candidatos, hay que dejar claro que lo que se dirime el próximo martes es la respuesta que deben dar los empresarios ante un gobierno hostil e intervencionista. Se trata de optar por un actitud complaciente que evite el enfrentamiento por lo que pueda venir después, o avanzar hacia una actuación reivindicativa en defensa de la economía de mercado.

Aunque Cuerva haya firmado, junto a Garamendi y los sindicatos, todos los acuerdos sociales que ha puesto sobre la mesa la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, considera que se ha cedido demasiado en cuestiones que hacen daño a la viabilidad de la pequeñas y medianas empresas. La contrarreforma laboral, la tributación de los autónomos, las subidas del salario mínimo interprofesional, la cuota de solidaridad para la financiación de las pensiones o las continuas subidas de los costes empresariales, forman parte de esa larga lista de problemas para las pymes.

En julio de 2024, el presidente de Cepyme lanzó un *Manifiesto por la Libertad de la Empresa*, que fue recibido con absoluta frialdad por su hermano mayor de CEOE. Desde entonces, las relaciones entre ambos se han ido tensionando y las elecciones del 20 de mayo se plantean ya como un preludio a las de la gran patronal en 2026. Antonio Garamendi ha eliminado el límite de mandatos y quiere volverse a presentar. Teme que si Gerardo Cuerva repite en la patronal de la pequeña y mediana empresa, sea su rival en los comicios del próximo año.

Las espadas están en alto y los 505 vocales con derecho voto tendrán que decidir dentro de una semana quién presidirá Cepyme durante los cuatro próximos años. Ambos candidatos se ven ganadores, aunque puede pasar cualquier cosa, porque las federaciones pueden asegurarles el voto favorable y luego hacer lo contrario. Eso, sin contar con el voto delegado que puede inclinar la balanza en un sentido o en otro.

Como en la política, en las organizaciones empresariales influye mucho el peso del poder adquirido. Con el paso del tiempo, se incrementan las posibilidades de un presidente de influir en los votos de sus asociados. El presupuesto da para ganar apoyos y hacer crecer el pesebre, siguiendo el ejemplo de los partidos políticos. Habrá que esperar una semana para ver quién resulta vencedor y, sobre todo, las heridas que quedan abiertas tras la campaña electoral.

**En las elecciones de Cepyme se dirime la respuesta de los empresarios ante un gobierno hostil**